

# Michelle Bachelet y ‘el fenómeno chileno’

Sergio Spoerer

---

**La nueva presidenta de Chile encarna las aspiraciones de buena parte de los ciudadanos en cuanto a mayor bienestar y oportunidades. Con una situación económica favorable, la legitimación democrática y el apoyo político dependen hoy de estas demandas sociales.**

---

**Q**ué inadvertidos deslizamientos habían estado ocurriendo en la sociedad chilena como para que lo que hasta hace cinco años era “impensable” hoy se viva como el escenario más deseable y de máxima normalidad por casi todos los actores involucrados?

Desde las organizaciones empresariales hasta el Partido Comunista y desde el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hasta el de Venezuela, Hugo Chávez, pasando por el recién asumido presidente Evo Morales en Bolivia, han considerado la elección de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile la mejor opción para el crecimiento, el desarrollo, la democracia y la estabilidad política del país y la región.

Bachelet –54 años, soltera, tres hijos, militante socialista de toda la vida, hija de un general de aviación muerto en prisión bajo la dictadura militar, torturada y exilada en 1974, ex ministra de Salud y de Defensa en el gobierno de Ricardo Lagos, habla fluidamente inglés, alemán y francés, y tiene estudios de posgrado en Defensa Nacional en academias de EE UU– era políticamente casi una desconocida hasta 2002. Por esas fechas nadie dudaba de la elección en 2005 del líder de la oposición, Joaquín Lavín.

En la Concertación de partidos por la democracia se hablaba de la “ceremonia del adiós” que pondría fin al ciclo de tres presidentes y 15 años de gobierno. La economía registraba las tasas más bajas de los últimos 20 años, el desempleo superaba los dos dígitos y el gobierno padecía los efectos políticos de distintos *affaires* que comprometían a altos cargos y parlamentarios. ¿Cómo explicar tan radical cambio de tendencias en menos de tres años?

---

Sergio Spoerer es doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Chile.

A partir de 2003, Chile inició un proceso sostenido de recuperación; el PIB creció un 3,2 por cien en ese año, un cinco por cien en 2004 y casi un seis por cien en 2005. La expansión del mercado chino ha hecho que el cobre alcance precios prácticamente sin precedentes y las finanzas públicas vuelven a mostrar un superávit, calificado “estructural” por el ministro de Hacienda, que supone un cuatro por cien del presupuesto público en 2005.

Esta recuperación de la situación económica –percibida como sólida y de largo plazo– revierte las percepciones de malestar y pesimismo existentes en el país durante los primeros años del gobierno Lagos. Crece el apoyo público al presidente, al gobierno y a su coalición. Durante los tres últimos años de su gobierno, el índice de apoyo a Lagos aumenta sistemáticamente, se mantiene en un rango de 60-65 por cien de apoyo ciudadano y alcanza un 70 por cien en los últimos meses de su gobierno. El peso de este recuperado capital político se hizo sentir en las elecciones municipales de finales de 2003, cuando la coalición de gobierno obtuvo resultados muy favorables que mostraron un cambio de tendencias electorales que se manifestaron en toda su magnitud en las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre de 2005 y en la segunda vuelta de las presidenciales, el 15 de enero 2006. Más allá de la recuperación económica, un verdadero deslizamiento telúrico tenía lugar en el paisaje social de Chile.

### **Contradicciones chilenas**

Los resultados del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizados en abril de 2002 confirmaron estadísticamente el impacto sobre la estructura socio-demográfica del crecimiento económico de Chile, que dobló su PIB en poco más de una década. Los datos hablaban, inequívocamente, de una mejora ostensible de las condiciones materiales de vida de la población. Sin embargo, paralelamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregaba el cuarto de sus informes bianuales sobre Desarrollo Humano en Chile, esta vez con el título de “Nosotros los chilenos: un desafío cultural”. De ambos estudios emergía la contradicción manifiesta entre la evidencia de los datos, que en el caso del PNUD permitía observar una mejora sostenida del índice de desarrollo humano del país, y las percepciones de las personas y de los colectivos sociales, que hablaban de insatisfacción, inseguridad, desencanto y desesperanza. Esta contradicción ya se había mostrado en el informe del PNUD en 1998, “Las paradojas de la modernización”.

No cabe aquí conjugar una síntesis de los principales datos del censo, sino reseñar algunas de las tendencias más significativas. Entre las mejores condiciones materiales de vida destaca el progreso alcanzado por la “ecología doméstica” de la población. La vivienda residencial ha aumentado un 25,7 por cien entre los censos de 1992 y el de 2002. El 72 por cien de las familias reside en vivienda propia, cuyos estándares de calidad mínimos son alcanzados por

el 90,7 por cien (frente al 81,1 por cien en el censo de 1992). El acceso a infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono) y bienes de consumo duradero (televisión, refrigerador, microondas, lavadora) se incrementan en un 20 y 30 por cien, respectivamente. Más de un tercio de la población dispone de vehículo motorizado propio. La escolaridad promedio de la población subió un punto, alcanzando 8,5 años, la cobertura de educación superior se duplica durante el periodo, destacando el hecho de que dos tercios de los universitarios actuales pertenece a familias que acceden por primera vez la Universidad. Se incrementa el nivel de empleo de la población (del 49 al 52,4 por cien entre ambos censos) y mejora el nivel de escolaridad de ésta. En la distribución del empleo por sector de actividad, destaca el peso alcanzado por los servicios y el decrecimiento en agricultura (del 16,1 por cien al 10,7 por cien) e industria (del 17,6 al 12,3 por cien). El censo muestra una reducción del empleo informal (del 25 al 21 por cien) y un incremento del trabajo asalariado (del 68,6 al 72,2 por cien).

El incremento del salario real fue del 49 por cien en esa década, frente a un crecimiento nulo entre 1970 y 1989. La relación entre mejora salarial y nivel de educación es manifiesta. La participación femenina en el mercado laboral pasó del 28,1 al 35,6 por cien, y es la principal causa del mayor índice de ocupación. Sin embargo, el empleo femenino es bajo en relación a países de similar nivel de desarrollo.

El acceso a vivienda propia y el tipo de nuevos empleos generados parecen explicar el cambio de patrón migratorio de la población. El porcentaje de asentamiento pasó del 81,3 al 84 por cien. Los emigrantes son, principalmente, jóvenes o adultos de mayor cualificación. Santiago y la región metropolitana han dejado de ser el polo de atracción migratoria. La tasa de urbanización es cercana al 90 por cien. La tasa de mortalidad infantil no supera el 10 por mil y la esperanza de vida sigue aumentando lentamente hasta cifras cercanas a los 80 años. El proceso de secularización es lento, siendo lo más destacable el decrecimiento de la población católica (75 por cien) y la continua expansión de minorías cristianas no católicas (evangélicos) que tienden a concentrarse en las zonas de mayor pobreza del país.

Paralelamente, la mejora de la infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos es evidente. En 1990 Chile disponía apenas de 300 kilómetros de carreteras de doble vía. Hoy cuenta con 2.500 kilómetros de autopistas de alto estándar y otros 2.000 de caminos secundarios. El movimiento de carga marítima se ha incrementado un 70 por cien y es en la actualidad el segundo país de América Latina en este aspecto. La carga aérea ha registrado un incremento del 300 por cien, y la capacidad de atención de pasajeros en las distintas terminales aéreas del país ha pasado de cuatro a 14 millones al año entre 1990 y 2002.

---

*Los indicadores de progreso económico no se corresponden con la percepción de prosperidad social*

Los indicadores de progreso material no se correspondían, sin embargo, con el malestar social, ni con la triste y frágil percepción de prosperidad que ofrecían diferentes estudios. La falta de correspondencia fue llamada “la brecha de la insatisfacción”. Éstas eran las paradojas de la modernización.

En su informe 2000, “Más sociedad para gobernar el futuro”, el PNUD amplía el análisis precedente añadiendo las perspectivas de los procesos de individualización, de generación de aspiraciones colectivas y de mayor atención al ciudadano por parte de la política. Cerrar la brecha de la insatisfacción requeriría mejorar el impacto del crecimiento económico –fuertemente erosionado entre 1998 y 2002– en términos de mejoría de las condiciones de vida psico-sociales y cívicas. El desarrollo institucional no basta con ser medido en términos de gobernabilidad, sino que exige una mejor *governance*: formación y logro de aspiraciones sociales, desarrollo de capacidades para el acceso efectivo a oportunidades, reforzamiento de la acción colectiva y de la ciudadanía entendidas como “mediación entre la sociabilidad cotidiana de las personas y las formas políticas de incidir sobre la marcha del país”.

El informe 2002, “Nosotros los chilenos: un desafío cultural”, cierra el ciclo de los análisis del PNUD desde la perspectiva de la cuestionada herencia de lo chileno en los imaginarios colectivos que cimentan la acción política como construcción simultánea de un orden económico e institucional y de una diversidad social no discriminante. Ni la vieja columna vertebral estatal, ni la emergente lógica del mercado logran configurar la pertenencia de un “nosotros” capaz de asegurar la convivencia y dar base a una comunidad de destino, a un proyecto-país. A comienzos de 2000, lograrlo era el gran desafío del desarrollo democrático de Chile.

La situación económica que Lagos tuvo que afrontar en sus cuatro primeros años de gobierno resultó ser mucho peor de lo previsto. La caída del crecimiento, de la inversión y del empleo mellaron las prioridades sociales del gobierno. Sólo a partir de 2003, el crecimiento del PIB, la inversión y el empleo mostraron claros signos de recuperación. A las dificultades económicas se sumaron en los tres primeros años del gobierno Lagos otras muy significativas en el ámbito institucional y político. Algunos casos de corrupción implicaron a parlamentarios de la coalición gubernamental y se desencadenó un proceso judicial sobre los sistemas de contratos del Estado y de pagos de sobresueldos a altos funcionarios. La importancia política del proceso radicaba en el hecho de que afectaba al ministerio de Obras Públicas –del que Lagos había sido ministro– e implicaba a estrechos colaboradores suyos.

### **Una sociedad insatisfecha**

“El fenómeno Bachelet” sólo puede entenderse a la luz de las tendencias antes reseñadas. En las percepciones ciudadanas empezó a encarnar desde

2003 –cuando su nombre emerge y no cesa de subir en las encuestas– lo que faltaba al crecimiento económico y a la solidez institucional para cerrar la “brecha de la insatisfacción”. El éxito del modelo económico de Chile es criticado prácticamente desde todos los sectores por su incapacidad de limitar sus efectos sociales no deseados. Disminuye la pobreza, pero se acrecienta la desigualdad. El “estilo Bachelet” cuadra en las percepciones ciudadanas la ecuación entre estabilidad macroeconómica e institucional, por una parte, y menor desigualdad, acceso a oportunidades para todos, mejor calidad de vida y buen trato cívico, por otra.

Si la democracia es buena no es no sólo porque las instituciones funcionan, sino también porque ampara, acoge, da seguridad, reconocimiento y sentido de pertenencia a quienes, en una economía de mercado, son víctimas de las crueldades de la “mano invisible”. Desde el inicio de la transición democrática, los estudios cualitativos muestran una alta satisfacción con el crecimiento económico y la creación de oportunidades, una menor satisfacción con el funcionamiento institucional respecto a la igualdad de acceso a dichas oportunidades y una baja satisfacción con el logro de aspiraciones de bienestar. Hay más “buena vida” que “vida buena”. Más ingresos, pero no tan “buen pasar”. Más competitividad, que alegría de vivir.

Los estudios de opinión permiten afirmar que Bachelet encarna fuertemente la aspiración social de cerrar esta brecha de insatisfacción, de aprobar como país esta asignatura pendiente. Según la revista *El Sábado* (*El Mercurio*, 5 de febrero de 2005), Bachelet representa “una tranquilidad nueva” (recuérdese “la fuerza tranquila” de François Mitterand en su primera elección en 1981) que aún garantiza de continuidad respecto a los logros en competitividad-país (personificados en Lagos) con el carisma de “una mujer acogedora, simpática, de buen genio (...), cálida, que no reta porque comprende; abierta, tolerante y que entiende que la vida está llena de dificultades”. En síntesis, esta figura de autoridad cariñosa, de “poder suave”, encarna nuevos patrones de valores consistentes, por ejemplo, “contar con más horas libres para poder, simplemente, vivir y disfrutar (...) buscando un trabajo que realice personalmente antes que uno bien remunerado. Es que ellos están más con los valores de la realización personal que con los caminos convencionalmente demarcados para alcanzar el éxito económico o social”. Este perfil político de Bachelet se corresponde con las demandas de la sociedad chilena, de cuya satisfacción parece depender hoy el fortalecimiento de la legitimidad democrática y del apoyo político.

Pese a haber sido formalmente candidata de la coalición de gobierno –la Concertación de partidos por la democracia–, Michelle Bachelet siempre

---

*La clase política  
chilena ha tenido  
éxito, pero la  
sociedad la  
percibe envejecida  
y distante*

afirmó que su postulación presidencial era “una candidatura ciudadana”. En efecto, su nombre se valida electoralmente desde fuera del *establishment* político. Sin el arrollador apoyo que mostraron las encuestas es imposible imaginar el acuerdo político en torno suyo.

La clase política chilena ha tenido éxito, qué duda cabe. Pero es una clase política envejecida, cerrada, percibida como distante y entrópica. En palabras de Eugenio Tironi en *La Tercera* (31 de julio de 2005), “lo que se observa, en efecto, es un silencioso cansancio de una élite compuesta sólo por hombres volcados obsesivamente a la cosa pública y disociados de la vida doméstica, confinados en instituciones desde donde ejercen un estilo frío, agresivo, opaco. En oposición a ello, lo que se busca es un liderazgo que preste más atención al bienestar de las personas que al funcionamiento de las estructuras; un liderazgo menos utópico y más cotidiano, menos dirigista y más acogedor, menos elitista y más compasivo, menos musculoso y más afectivo, menos autoritario y más participativo”.

En palabras de la propia Bachelet en la revista *El Sábado* (23 de julio de 2005): “Mi concepción es que uno puede ejercer liderazgos más o menos autoritarios, más o menos democráticos, con más o menos ambición, pero yo creo en un liderazgo mucho más articulador de voluntades, más convocante que autoritario. Creo en la autoridad en el sentido de que uno toma decisiones, pero estas decisiones van a ser más precisas y más finas si se toman conociendo lo que la gente piensa, cuáles son sus necesidades y sus propuestas. Vale decir, no hay contradicción entre un liderazgo fuerte, pero ciudadano y acogedor. Yo apuesto a un tipo de política cuyo objetivo sea mejorar la vida de las personas, mejorar las condiciones de la sociedad (...). Conocemos lo bueno de ser mujer y sus muchas dificultades. Funcionamos entre grandes ideas, pero nos importa la implementación concreta y práctica, el aterrizaje de las cosas. Nos movemos en lo macro, pero nos importa que lo micro esté bien garantizado. Y no es que tengamos poco vuelo, sino que sabemos que las grandes ideas, si no se implementan bien, pueden ir al fracaso”.

Los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial no fueron una sorpresa. Michelle Bachelet se impuso sobre el candidato de centro derecha, Sebastián Piñera (quien a su vez había superado a Joaquín Lavín en la primera vuelta) por siete puntos porcentuales (53,5 frente a 46,5 por cien). Resultado que se corresponde con lo que los sondeos indicaban desde hacía meses. Los resultados de la elección parlamentaria –realizada simultáneamente con la primera vuelta de la elección presidencial el 11 de diciembre de 2005– otorgaron a la Concertación un 52 por cien de los votos y obtenía, por primera vez en 15 años, mayoría absoluta en ambas cámaras.

Elegida por un periodo de cuatro años, no reelegible, Bachelet contará con una mayoría parlamentaria y con atribuciones (remoción de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas) de las que estuvieron privados sus predecesores, dadas las restricciones democráticas de la Constitución here-

dada de Augusto Pinochet y eliminadas por la reforma constitucional de 2005, que suprime la casi totalidad de los llamados “enclaves autoritarios” vigentes hasta entonces (con excepción del sistema electoral binominal).

En el escenario político que afrontará Bachelet jugarán a su favor tres elementos principales: en primer lugar, la estabilidad macroeconómica y el superávit fiscal con que recibirá el gobierno (no en vano el índice mundial de competitividad situó a Chile en el primer puesto en cuanto a “calidad de la política macroeconómica”); en segundo lugar, las previsiones de crecimiento económico, estimado en torno a un seis por cien para los próximos años; y, por último, el elemento político dado por la mayoría parlamentaria de que dispondrá en las dos cámaras (por primera vez desde 1990).

La brevedad de la presidencia (cuatro años) hará, sin embargo, que el “período de gracia” que se supone la oposición concede a todo nuevo gobierno sea prácticamente nulo, y los portavoces de la oposición ya han confirmado el papel de fiscalización y denuncia que se atribuyen al prever que la mayoría parlamentaria con que cuenta el gobierno no requerirá –como en el pasado– de acuerdos legislativos que daban a la oposición un significativo poder.

Antes de que se produzcan las próximas elecciones simultáneas de parlamentarios y presidente (diciembre 2009) sólo habrá una elección: las municipales de octubre 2007. Si pretende llegar a la presidencia en 2009, la oposición de derecha sólo dispondrá de 18 meses para alcanzar en las municipales el inicio de una reversión de tendencias electorales a su favor.

Por su parte, en sus relaciones con la derecha, Bachelet buscará contenerla en sus cauces institucionales y volcar a su favor el sostenido discurso neopopulista de los candidatos conservadores durante la elección presidencial. En palabras de Bachelet (*El Mercurio*, 22 de enero de 2006): “La derecha no debe temer nada: conoce mi programa, durante más de un año estuve con los otros candidatos y hubo muchos puntos de acuerdo. Supongo que tiene que haber coherencia entre lo que prometieron apoyar en cuanto a una serie de iniciativas. Y, como he señalado, yo me voy a entender con la derecha como en cualquier democracia. Los ‘temas país’ son temas de Estado, temas de todos. No sólo voy a contar con esos acuerdos, sino que los voy a buscar. Yo quiero contar con una derecha constructiva. Y me entenderé con toda la derecha”.

Suena fácil: “toda la derecha”. Sin embargo, ésta convive con sus propios demonios. La Unión Demócrata Independiente (UDI), pese a la derrota de su candidato, Joaquín Lavín, en la primera vuelta de la elección presidencial a manos de Piñera, candidato del Partido Renovación Nacional (RN), permanece como el más fuerte partido de la derecha, con mayor arraigo social en

---

*Bachelet tiene a su favor la buena situación de la economía y una mayoría parlamentaria*

todo el país y más numerosa representación parlamentaria. El triunfo de Piñera sobre Lavín no es extrapolable a un cambio del peso específico relativo entre los dos partidos de derecha. Y la disputa por el liderazgo electoral de cara a las presidenciales de 2009 está ya lanzada. El hito de las municipales de 2007 debería favorecer a la UDI por su mayor implantación territorial. RN ha estado sacudido por sus luchas internas y su frágil gobernabilidad. A su vez, en la UDI –hecho inédito– una joven generación de dirigentes ha llamado públicamente a una renovación de sus cuadros dirigentes herederos directos de la dictadura militar.

A una semana de la elección presidencial, Piñera aludió al fondo de las transformaciones que podrían producirse en los años venideros, no sólo en la derecha, sino en el conjunto del país (*El Mercurio* 22 de enero de 2006): “Hay que mejorar nuestro sistema electoral, para que refleje mejor la voluntad de la gente, le dé más opciones de elegir, permita la irrupción de fuerzas emergentes significativas; disminuya las tensiones que el [sistema electoral] binominal genera dentro de cada alianza, y genere grandes coaliciones. Yo tengo una propuesta, que daré a conocer en su momento. La rigidez del actual sistema electoral es el mejor seguro de vida de la permanencia de las coaliciones, pero si avanzamos hacia un sistema que dé más libertad y flexibilidad, en el futuro vamos a conocer nuevas alianzas políticas”.

Los comentarios del politólogo Oscar Godoy, uno de los más respetados intelectuales de la derecha, resumen bien los desafíos de la derecha chilena en los próximos años. En una columna de opinión del diario *La Tercera* (21 de enero de 2006), señala que la candidatura de Piñera “puso en marcha un proceso de inclusión y diversificación del centro-derecha capaz de generar una nueva mayoría nacional. Si no se ganó es porque siendo éste un proceso inacabado, aún persiste un veto fuerte a quienes representan a una coalición que no termina de liquidar todos sus vínculos, reales y aparentes, con el autoritarismo. Para vencer este veto, debe cumplirse una etapa extremadamente dura, que entraña actos positivos para democratizar instituciones y prácticas y el retiro de la vida privada de todos los colaboradores directos con la dictadura (...). De ahí fluyen las grandes tareas de plazo medio: la creación de un proyecto político que interprete a una nueva mayoría; la sustitución de la Alianza por Chile por una coalición verdaderamente política, con inclusión de sectores liberales y del centro social-cristiano, la democratización de la UDI; la refundación de RN, para que adquiera una identidad (ojalá liberal) perceptible y confiable para la opinión pública”.

Con todo, quizá las principales dificultades políticas las tenga la nueva presidenta en el seno de su propia coalición. Principalmente, con el Partido Demócrata Cristiano. Éste, primero con Lagos, ahora con Bachelet, ha perdido las primarias abiertas donde la Concertación elige su candidato presidencial. Adicionalmente, en las elecciones parlamentarias, el PDC vio disminuida significativamente su representación parlamentaria tras las derro-

tas de varias de sus figuras emblemáticas frente a los candidatos del llamado “polo progresista” de la Concertación: Partido por la Democracia (PD), Partido Socialista (PS) y Partido Radical Social Demócrata (PRSD), principal beneficiado del “efecto halo” de Bachelet.

Pese a todo, las principales dificultades del PDC no son electorales, sino de convergencia entre sus tendencias internas y, por tanto, de gobernabilidad. El PDC vive en equilibrio precario desde hace varios años. Sus acuerdos internos son frágiles, de corto plazo y sistemáticamente ventilados a través de los medios de comunicación. El sector que parece electoralmente más significativo en el país (encabezado por la ex precandidata presidencial y actual senadora electa por Santiago, Soledad Alvear) está marginalmente representado en la dirección del PDC. De allí, las dificultades de Bachelet para decidir los nombres de los militantes del PDC que integrarán su primer gabinete ministerial. En abril de 2006, el PDC realizará una junta nacional (organismo máximo de su dirección entre congresos) en la que deberá ser elegida una nueva presidencia. Alvear ya ha postulado su candidatura.

### **Prioridades económicas**

Ni la clase política ni los mercados esperan cambios en la gestión macroeconómica del país. Bachelet ha declarado, en relación al modelo económico vigente, que su objetivo es “ir avanzando cada día, para que sea más una economía social de mercado”. Ha descartado una reforma fiscal y afirmado que mantendrá la llamada “regla del superávit estructural” del uno por cien del presupuesto.

Teniendo en cuenta el programa de gobierno y las declaraciones de la presidenta, parece claro que su prioridad estará en la creación de un sistema de protección social que pivotará sobre una reforma al sistema provisional, la extensión y garantía efectiva de acceso a la salud (Plan Auge), lo que implicaría ajustes normativos en el funcionamiento de las aseguradoras privadas de salud (Isapres) y un significativo aumento de la educación parvularia. Según sus palabras: “Quiero dejar, como identidad de mi gobierno, consolidado un sistema de protección efectiva desde la más tierna infancia hasta la vejez. El proyecto de pensiones va a ser fundamental. También, la cobertura universal de la educación preescolar, las salas-cuna para los hijos de todas las madres trabajadoras y jardines infantiles para el 40 por cien más pobre y educación superior por mérito y no por su situación socioeconómica. Algunos resultados no se verán en cuatro años, pero tendremos andando las salas-cuna, los jardines infantiles, aumento de becas y créditos a la educación superior. Dejaremos consolidado el sistema”. Con cargo al excedente fiscal de 300 millones de dólares de libre uso disponible en el presupuesto de 2006, Bachelet ha asegurado que en los primeros 100 días de gobierno subirá las pensiones mínimas (no se han precisado las cantidades) a

un millón de jubilados y garantizará el acceso automático a pensión asistencial a los mayores.

La legitimidad y urgencia de políticas públicas que reduzcan la desigualdad fue reiterada por todos los candidatos durante las presidenciales. Si bien la pobreza se reduce, aún alcanza a un 18,8 por cien de la población, del cual un 4,7 por cien vive en la indigencia. La desigualdad social es más grave aún; el 20 por cien más rico del país percibe el 62,2 por cien de los ingresos, mientras que el 20 por cien más pobre escasamente recibe el 3,3 por cien. Con una tasa de crecimiento económico de seis por cien y una inversión de 29,7 por cien, la más alta de la historia, existen fundadas razones para prever un sostenido aumento en la creación de empleo (el paro promedio en 2005 fue del 8,1 por cien) y en la recaudación fiscal para la financiación de políticas sociales más focalizadas y de alto impacto en las familias pobres.

Más allá de los desafíos mencionados, el gobierno de Bachelet necesitará cuadrar otra ecuación particularmente compleja. Aquélla que tiene como variables la seguridad energética de Chile y su política con los países vecinos, principalmente Argentina y Bolivia. Las afinidades políticas y las simpatías personales entre los gobernantes de los tres países permiten imaginar soluciones inéditas a conflictos históricos y antagonismos económicos que podrían permitir –en palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales– “hacer historia” en esta región de América Latina.